

RE: SOLICITUD NULIDAD PARCIAL PROCESO 8500131030022017- 00168-02

Juzgado 02 Civil Circuito - Casanare - Yopal <j02cctoyopal@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Lun 21/11/2022 11:59 AM

Para: jlbarrios2006@hotmail.com <jlbarrios2006@hotmail.com>

Buen día.

Acuso recibido, su comunicación será agregada al expediente y oportunamente se le dará trámite.

Cordialmente,

ISRAEL AMAYA BARRERA  
Citador



*Distrito Judicial de Yopal*  
*Juzgado Segundo Civil del Circuito Yopal – Casanare*  
*Carrera 14 No. 13-60. Tel. 3203568771 Email.*  
*[j02cctoyopal@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:j02cctoyopal@cendoj.ramajudicial.gov.co)*

---

**De:** JOSE LUIS BARRIOS ARRIETA <jlbarrios2006@hotmail.com>  
**Enviado:** lunes, 21 de noviembre de 2022 11:44 a. m.  
**Para:** Juzgado 02 Civil Circuito - Casanare - Yopal <j02cctoyopal@cendoj.ramajudicial.gov.co>  
**Asunto:** SOLICITUD NULIDAD PARCIAL PROCESO 8500131030022017- 00168-02

Yopal, noviembre 21 de 2022

Señor  
**JUEZ SEGUNDO CIVL DEL CIRCUITO DE YOPAL**  
E. S. D.

PROCESO REIVINDICATORIO  
RADICACIÓN: **8500131030022017- 00168-02**  
DEMANDANTES: GILBERTO GALINDO y otros.  
DEMANDADOS: CÉSAR WILLIAN NIÑO PIÑEROS y otra.

**JOSÉ LUIS BARRIOS ARRIETA**, en mi condición de apoderado de parte, debidamente reconocido y además de sancionado disciplinariamente por el despacho dentro del proceso de la referencia, estando dentro de la oportunidad legal para ello, concurro ante su despacho respetuosamente a solicitar **se declare la nulidad de las providencias de junio 29 y octubre 19 de 2022**, por las razones que expondré a continuación; actuaciones procesales estas, mediante las cuales el despacho sin resolver legalmente algunas de las aristas procesales pendientes, decide:

En el **primero** de ellos: *“IMPONER como sanción al abogado José Luis Barrios Arrieta C.C. No. 9.309.306 y a la demandada Raquel Triana Silva C.C. 24.227.192 en forma solidaria, por la suma diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, que ascienden a la suma de \$10.000.000.00, **por su actuar temerario y de mala fe** bajo los postulados del artículo 147 del CGP, la cual deberán cancelar dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta decisión, suma que se debe consignar en la cuenta de multas y cauciones del banco agrario de Colombia; de no ser consignadas dentro del término concedido con la constancia del caso, por secretaria se ordena dirigir el oficio respectivo al Consejo Seccional de Judicatura, a efectos de surtir el cobro coactivo.*

*“CUARTO. **COMPULSAR copias** ante la Comisión Seccional De Disciplina Judicial De Boyacá, **con el fin de que adelante la investigación disciplinaria al abogado José Luis Barrios Arrieta por faltas a la ética profesional.**”.*

Y la **segunda** de la citadas resuelve:

“QUINTO. **NEGAR la solicitud presentada con respecto a la sanción impuesta en auto de fecha 28 de junio de 2022**, por cuanto la decisión cobró firmeza con lo resuelto al respecto por el superior.

SEXTO. FIJAR el día 22 de noviembre de 2022 a las 8:00 a.m. para llevar a cabo la diligencia de entrega de la franja objeto de reivindicación que se desprende del predio identificado con F.M.I. No. 470-78708 ordenada en el 4 de la sentencia de fecha 18 de agosto de 2020, toda vez que a la fecha no se ha materializado dicho acto. Dicho diligenciamiento tendrá su inicio en las instalaciones del Juzgado, se requiere en igual medida el acompañamiento de personal del Comando De Policía local, así como de un delegado de la Personería Municipal para lo cual se dispone oficiar por secretaría.”. (resalto y subrayo)

**CAUSAL DE NULIDAD EXPUESTA:**

En nuestro ordenamiento las causales de nulidad de origen legal son taxativas. En este caso y a juicio respetuoso del suscrito, ellas son de dos tipos: **Constitucional:** Artículo 29, y **legales:** Artículo 133 del CGP, numerales 2 y 8.

Igualmente, tanto por ordenamiento al debido proceso indicado obligatoriamente en el Artículo 29 superior como en el Artículo 134 ibidem, las nulidades podrán alegarse en cualquiera de las instancias antes de que se dicte sentencia o con posteridad a esta, si ocurrieren en la ejecución de ella.

Y en cuanto al procedimiento, la norma legal, sin establecer excepción alguna nos indica que, **ella no puede ser resuelta de plano**, sino que: “El juez resolverá la solicitud de nulidad previo traslado, decreto y práctica de las pruebas que fueren necesarias”.

En este caso, la nulidad se invoca parcialmente contra los **autos de junio 28 y octubre 19 de 2022**, dado que , si bien tales decisiones contienen referencias a situaciones diferentes, son en ambos casos, una providencia unívoca e integral, por lo que no podrían ser ejecutados sin resolverse la solicitud planteada.

**SUSTENTACIÓN:**

El numeral 2° del Artículo 133 del CGP, - norma en la cual se establecen las causales de nulidad de orden legal - nos dice que ellas se producen:

- i. “2. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o **pretermite íntegramente la respectiva instancia**.” (resalto y subrayo)

En las providencias cuya nulidad se depreca el despacho, de una parte, (junio 28) **resuelve sin cumplirse la respectiva instancia de**

**descargos y pruebas**; y en la segunda (oct.19), continúa en la misma tónica y **niega mis solicitudes con respecto a la sanción que inconstitucional e ilegalmente me ha impuesto de plano en el auto de junio 28 de 2022**. Estas decisiones se toman sin señalar los soportes jurídicos procesales de tal actitud de pretermisión y/o a las razones de ello, y solo aludiendo genéricamente – en la segunda de ella - a que ello se hace: “*por cuanto la decisión cobró firmeza con lo resuelto al respecto por el superior*”. Este soporte es de dudoso arraigo jurídico toda vez que, elude mencionar el *a-quo*, que el Tribunal Superior alegando falta de competencia, nunca se ha referido a la sanción en mi contra y a mis argumentos de defensa, desconociendo y dejándolos en el limbo jurídico, incurriendo entonces la providencia nugatoria de fondo y en este punto, además de la causal 2ª del Artículo 133 ibidem, la directa vulneración del Artículo 29 constitucional lo que conlleva a la solicitud de nulidad ahora impetrada.

Hasta el momento, su señoría ni el Tribunal Superior se han dignado dar respuesta al suscrito de las solicitudes, en una clara denegación de justicia y una violación de mi derecho fundamental al acceso a la administración de justicia.

Es el mismo derecho de acceso a la justicia, el que se vulnera a mi poderdante, cuando utilizando la famosa posición “jurídica” de algunos despachos - administrativos y judiciales - de justificar sus decisiones en la teoría del “*sí porque sí, o porque yo lo dije*”, el juzgado, bajo la sombra del silencio del Tribunal sobre el punto, se ha negado a explicar - en derecho – por qué ha fallado extra o ultra petita si la ley lo prohíbe expresamente en materia civil, asunto que no es de este libelo. En todo caso pedimos al Señor Todopoderoso haga justicia.

II.. De igual forma el numeral 8º de la citada norma, en lo pertinente, enseña:

“(…)Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el defecto se corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que se haya saneado en la forma establecida en este código.”.

En efecto, el legislador ha establecido distintas formas de notificación de las providencias judiciales de conformidad con cada actuación. Esas son de orden público e inmodificables y su incumplimiento es causal de

nulidad en algunos casos insubsanable y en otros reparable. En nuestro caso, no tenemos conocimiento que ella haya sido saneada.

Esta **segunda nulidad** ciertamente es subsanable, pero no deja de ser una nulidad así prevista en la ley y por tanto, en puridad del proceso y lealtad procesal, debe dársele el trámite de ella y resolverse por cuanto, la vulneración del precepto jurídico así lo indica y permite. En efecto, el auto de **octubre 19 de 2022**, en el cual se concretan las nulidades que se expondrán, desconoce el Artículo 308 del CGP. Esta norma, en su numeral 1° en la parte pertinente dice:

*“...Si la diligencia de entrega se solicita dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la sentencia o a la notificación del auto de obediencia al superior, el auto que disponga su realización se notificará por estado; si la solicitud se formula después de vencido dicho término, el auto que la ordene deberá notificarse por aviso”.*

En este caso, conocido como es que la solicitud de entrega no se ha podido hacer por diferentes razones, - incluso por omisión de la parte actora que no acudió al despacho en su oportunidad -, es evidente que han transcurrido sobradamente los 30 días de haberse expedido el auto de *obedézcase y cúmplase* al superior que conoció la sentencia de primera instancia y en consecuencia, las normas adjetivas exigen que la notificación de **la diligencia de entrega que se pretende realizar el 22 de noviembre de 2022**, se realice mediante una notificación por aviso, lo que no se ha cumplido. Esta exigencia del legislador no es caprichosa, sino instaurada con el fin de permitirle a terceros e indeterminados que puedan tener algún interés en la diligencia, que no se vean sorprendidos por el despacho en su ejecución y así enterarse y acudir o participar a ella, si es su deseo.

Como ya dijimos, las normas procesales son de orden público y de ineludible cumplimiento tanto a las partes como al despacho.

En el tenor literal del auto de **octubre 19 de 2022**, cuya nulidad se depreca, y contrario al contenido del auto de la misma fecha, pero en el año 2021, se observa sin hesitación alguna, que el despacho, por razones que desconocemos, obvió el cumplimiento de este mandato de **notificar por aviso** del citado numeral 1° del Artículo 308. Mi condición de juez y la ética, me obliga a poner esta situación adjetiva en conocimiento del señor juez y de las partes para lo pertinente para que se corrija el asunto o se mantenga si el despacho considera que es correcto realizar las actuaciones sin el cumplimiento de este requisito.

**DE LA VIOLACIÓN A LA CONSTITUCIÓN Y A LA LEY EN EL  
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO.**

**INTROITO.**

En el auto del **28 de junio de 2022**, en lo pertinente el despacho señaló:

*“Finalmente, en lo que atañe a que el Juez esté vinculado a la investigación, necesario es recordar que el acto procesal por medio del cual se vincula a la persona formalmente a un proceso penal y se le ponen en conocimiento los hechos materia de investigación, en la formulación de imputación ... .”*

*“Mecanismo de vinculación por el cual se informa al investigado acerca de los hechos por los cuales la fiscalía está desarrollando una investigación penal en su contra, actuación en la que el fiscal deberá realizar lo siguiente: i) individualizar e identificar al procesado; ii) exponer de manera clara y sucinta los hechos jurídicamente relevantes; iii) calificar jurídicamente los hechos endilgados; y iv) plantear la posibilidad que tiene el imputado de aceptar cargos.*

*Situación jurídica que no ha ocurrido, tan es así que antes de que a ello se procediera (asumo que se refiere a la imputación), el fiscal del caso solicitó la preclusión, por encontrarse reunidos los presupuestos de la atipicidad del hecho investigado, dejando ausente la concurrencia de este requisito indispensable para que proceda la recusación.”*

*“En virtud de lo anterior, no podría aceptar el titular de este despacho la recusación expuesta por la demandada por conducto de su representante judicial, por resultar abiertamente contraria a derecho, en tanto no cumple con ninguno de los requisitos previstos en la causal séptima del artículo 141 del Código General del Proceso para su prosperidad.” ( resalto y subrayo)*

Es claro que para el despacho, al estar ausente la exigencia de la vinculación del señor juez, a un proceso penal presentado en su contra por una de las partes, la recusación no prospera. A *contrario sensu*, si esa situación de vinculación se hubiese presentado, entonces la recusación tendría fundamento.

En el sentir de su señoría, no acepta la recusación porque nunca ha estado vinculado a la investigación en el proceso penal (que es la exigencia procesal) y no lo ha estado porque, en su entender, para estar vinculado debe estar imputado, confusión que respetuosamente no creemos se ajuste a la realidad procesal.

Afirma el operador judicial en el auto de junio 28, que nunca ha sido imputado penalmente por los hechos denunciados por William Niño y su esposa Raquel Triana, y obvio, si no lo imputan, por ello usted considera que no está vinculado a un proceso. La lógica indiscutible de eso nos

lleva obviamente a la decisión expresada en su auto: ... está (...)ausente la concurrencia de este requisito indispensable para que proceda la recusación."

Desconocemos cual pueda ser el nivel de experiencia del señor juez en el campo penal que le permita hacer esa interpretación entre imputación y vinculación. La del suscrito tampoco es mucha y de antemano presento excusas por si me equivoco. Pero, la simple lectura de la causal 7° del artículo 141 del GP y de los artículos 336 y 337 del CPP nos dicen algo diferente a esa interpretación plasmada en el auto de junio 28 de 2022. Desde luego, hay mucha diferencia entre *estar vinculado* – *que es lo que exige la norma* - y tener encima un escrito de acusación, que es a lo que se refiere su señoría como imputación.

A *contrario sensu*, de estas normas en mi modesta y respetuosa interpretación, claramente se desprende que la solicitud de preclusión de la que se ufana su señoría en la referencia del auto mencionado, como sustento a su negativa, **solo es posible después de la vinculación al proceso.**

Por simple lógica, no es posible que se decrete la preclusión a favor de alguien que no está vinculado y/o como imputado a un proceso. Por manera que si, como confiesa el señor juez, el señor fiscal solicitó la preclusión (se precisa que esa decisión fue tomada después de presentada la recusación que se niega), es porque indudablemente usted estaba *vinculado* al proceso, que es la exigencia y única condición exigida de la ley. Que como culmine esa vinculación procesal y sus efectos en la recusación, ya es situación decantada por la jurisprudencias en vaivenes ambivalentes conocidos, pero, repetimos, no es la exigencia procesal.

Señalan las normas penales antes citadas que, es después de formulada la respectiva Imputación, cuando la fiscalía tiene un término de treinta (30) días contados a partir del día siguiente de la misma, para solicitar o no, la preclusión, aplicar el principio de oportunidad o presentar el respectivo escrito de acusación ante el correspondiente juez de conocimiento. De hecho, al parecer fue la propia fiscalía quién por razones procesales, se negó a aceptar el desistimiento de la denuncia que quiso presentar en su momento el señor César William Niño. Advierto que hablo de referencia sobre hechos del proceso penal el que no conozco de profundidad ante su reserva y al no haber sido parte y que, el señor juez, parece no recordar con precisión o con alguna confusión procesal al redactar el auto referido.

DEL DEBIDO PROCESO EN ACTUACIONES DISCIPLINARIAS DEL JUEZ.

No es desconocido en nuestro ámbito de trabajo, que el debido proceso tiene asiento constitucional en el Artículo 29 de la Constitución y en el bloque de constitucionalidad. Las garantías derivadas del debido proceso en asuntos disciplinarios, desarrolladas mayoritariamente por la vía jurisprudencial, permiten al suscrito considerar que para una mejor comprensión de nuestro reclamo de nulidad, se pueden categorizar en tres grandes estancos, a saber: i) garantías del debido proceso previas al inicio de la actuación disciplinaria; ii) garantías de debido proceso que operan durante la actuación disciplinaria; y, iii) garantías del debido proceso aplicables en forma posterior a la imposición de la sanción disciplinaria. Esta apreciación personal no es desde luego excluyente de otros criterios como los que pudo haber tenido el despacho en la decisión que nos convoca, ya que ella la señaló desde la perspectiva del sujeto sancionado desconociendo el Artículo 29 superior. Consideramos comedidamente que ninguna de las tres categorías arriba indicadas se cumplen en nuestro caso: Veamos brevemente mi opinión:

El despacho expresó en el auto de **junio 28 de 2022**:

*“Teniendo encuentro los expuesto anteriormente procede el despacho a remitir el proceso al superior, esto es, ante el Tribunal Superior para que decida la recusación, atendiendo las disposiciones del inciso tercero del artículo 143 ejusdem.”* (sic) (resalto y subrayo)

Obsérvese, por favor, que *ab initio*, el despacho sabe que el Tribunal no puede pronunciarse sobre la sanción inconstitucional e ilegalmente impuesta al suscrito y por ello solo se refiere a la recusación. No hay norma que así lo consagre. El envío de la decisión en lo referente al aspecto sancionatorio en mi contra y mi poderdante al Tribunal, es solo entonces un mero formalismo en ese campo, pero que ahora, el despacho lo utiliza de soporte en el **auto de octubre 19** (*por cuanto la decisión cobró firmeza con lo resuelto al respecto por el superior*).) para sustentar de manera definitiva la actuación **iniciada en junio 28**. Respetuosamente señalo entonces, que al contrario de lo que señala tal providencia, el Tribunal no ha resuelto nada en lo que al aspecto sancionatorio respecta y mal puede ser entonces ese silencio del superior, el soporte de la presunta legalidad y firmeza de la decisión.

En efecto, el despacho en el auto que niega la recusación (dizque porque no está vinculado a un proceso de denuncia de la actora), *decide sancionarme objetivamente por mi conducta* y/o subjetiva por el sentir de su señoría que consideró irrespetada la justicia, - lo que es mera



elucubración pues no tengo dotes de arúspice, y no podría asegurar cuál fue el motivo -. Pero, cualquiera que fuese el caso, me compulsa copias para que se me investigue disciplinariamente porque considera que mi conducta viola la ética profesional y además, me sanciona con la mayor multa posible sin indicar el procedimiento señalado.

Todo lo anterior lo hace el despacho desconociendo el Artículo 29 constitucional, es decir, *sin la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio*, pues, además de no señalar cual es la norma donde se indica el procedimiento utilizado para sancionar de tal forma, lo hace **sin oírme en descargos**, y desde luego, sin la más **mínima oportunidad de defensa** dentro del proceso disciplinario *sui generis*, secreto y extra rápido que practica a espaldas del investigado. Desde luego, este atropello a la Constitución es lo que permite tomar decisiones sin que se presenten o practiquen pruebas o se establezcan los cargos con lo cual, el despacho ***pretermite una de las instancias de todo proceso disciplinario***, se afirma lo anterior porque no por el hecho de realizarse a escondidas, como en una inquisición española y dentro de un proceso civil, deja de ser de la naturaleza indicada.

La Corte Constitucional - Sentencia C - 641 de 2002 - lo dejó bien claro: ***“El derecho fundamental al debido proceso, es la regulación jurídica que de manera previa limita los poderes del Estado y establece las garantías de protección a los derechos de los individuos, de modo que ninguna de las actuaciones de las autoridades públicas dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas a los procedimientos señalados en la ley.”***.

Esta sanción, del auto de **junio 28**, es ahora **ratificada** en el auto de **octubre 19**, - cuyas nulidades se solicitan - sin explicaciones jurídicas y solo aludiendo a lo *“resuelto por el superior”* que ya vimos es inexistente. En este último, culmina al parecer, el ciclo de violaciones a la Constitución y la Ley, desconociendo, repito, las **instancias de los descargos y pruebas**, requisito éste, ***sine qua non*** en todo proceso disciplinario, e incurso dentro de la causal segunda del **Artículo 133** del CGP.

Recordemos respetuosamente, que el proceso disciplinario en mi contra y la sanción solidaria subsecuente, surge porque su señoría considera que, puede actuar **con posterioridad a la terminación del proceso, pese a estar vinculado, penalmente** – lo que de suyo lo coloca en una posición *subjudice al momento de ordenar la ejecución de la sentencia*. En efecto, aunque elude decirlo en la providencia, lo cierto es que el señor juez, en el momento que es recusado, estaba sin resolver su situación jurídica, pero, considera que puede disponer sobre la ejecución de la sentencia (se precisa que la ejecución ya no es un aspecto del proceso).

Comentado [JB1]:

En consecuencia, consideramos, respetuosamente, que no existen marcos procesales cumplidos para emitir, al menos, la sanción impuesta. De hecho, es la **inexistencia del procedimiento aplicado en mi contra** lo que el despacho no puede ocultar y **produce la nulidad constitucional y legal deprecada**.

Estas actuaciones inconstitucionales e ilegales se producen a su vez, dentro del proceso civil de la referencia afectándolo directamente. Por manera que, en mi respetuoso concepto, **como quiera que las decisiones cuyas nulidades se deprecen se toman en el mismo auto, toda la providencia se ve implicada en la decisión de fondo y las hace inaplicables**.

Como ya señalé, el Tribunal en providencia de septiembre 1º de 2022, se declara incompetente para resolver sobre la sanción al suscrito, aspecto que se infiere, el dispensador de justicia conocía. Esa incompetencia del superior, no es patente de corso para que el inferior se niegue a resolver de fondo mis peticiones y solicitudes tal como parece entenderse del silencio del despacho en ese aspecto.

Dijo el despacho en su momento: *“Colofón de lo anterior, diáfano resulta que la recusación propuesta contra el titular del Juzgado Segundo Civil del Circuito, no es procedente, pues carece de cualquier asidero fáctico o jurídico, además, que es una actuación que desconoce abierta y flagrantemente los presupuestos adjetivos y procesales consagrados tanto en la ley como en la jurisprudencia, ya que se basó en situaciones que carecen de asidero fáctico y legal para su proposición; en suma, la ligereza con que se actuó coloca a los proponentes de la figura en comento en posición de temeridad, en tanto, con la situación esbozada se dilata la diligencia de entrega ordenada en cumplimiento de la sentencia de fecha 18 de agosto de 2019.*

*En efecto, se procederá a dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 147 del CGP, imponiendo como sanción la suma diez (10) salarios mínimos mensuales la demandada y a su representante judicial en forma solidaria, por haber actuado con temeridad o mala fe, además de remitir copia de lo pertinente a la autoridad que corresponda con el fin de que adelante la investigación disciplinaria al abogado por faltas a la ética profesional.”*

Es muy, pero muy discutible, eso de la inexistencia de asidero fáctico o jurídico de la recusación por las razones someramente indicadas, pero, no es el centro de este debate. Como vimos, la confusión sobre los conceptos de vinculación, imputación -acusación - lo que lleva de buena fe al señor juez, a considerar que no se encuentra inmerso en la situación de impedimento para seguir conociendo de la etapa de ejecución de la sentencia, porque repetimos, el proceso YA TERMINÒ, y no hay ninguna razón jurídica, para que cualquier otro juez no haga la entrega de rigor, que intensa y reiteradamente ha pretendido hacer el distinguido regente del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Yopal, sin

que las razones o insistencia para hacer personalmente esa diligencia de entrega, sean evidentes para el suscrito.

Sin embargo, creemos respetuosamente que, ante lo ínfimo de la diligencia a practicar y en aras de la probidad y majestad de la justicia, y el hecho de estar *ad portas* de una definición de situación judicial producida por denuncia de una parte interesada, seguir actuando tal vez no sea ilegal o prohibido procesalmente, pero, por mera ética debió apartarse oficiosamente y no producir decisión alguna para la ejecución final de la sentencia de agosto 2020. Sin ánimo de ofender, pero la insistencia de practicar la diligencia pese a estar denunciado y vinculado a un proceso penal por sus actuaciones; no es lo más aconsejable para la justicia, tan denigrada como está, como por ejemplo, con el *cartel de la toga* y otras circunstancias que afectan a nuestra profesión.

No tenemos razones para suponer que la denuncia de mi mandante - que no es infundada - haya alterado, el reconocido en la comunidad judicial, ánimo ecuánime e imparcial de su señoría, ánimo que, además, se espera de todos los jueces. Pero, lo cierto es que, además de no existir en las providencias de **junio 28** y **octubre 19** la explicación jurídica que soporte esa decisión sancionatoria, tampoco se puede inferir por qué, alguien tan versado en el derecho, pretermite la instancia probatoria y de descargos del suscrito y sanciona al acusado sin escucharlo. De contera, ante las solicitudes y recursos presentados, la respuesta es el silencio y la confirmación a rajatabla de la decisión anterior, aún a sabiendas que **la instancia de descargos y probatoria nunca ha existido** en este caso.

En la parte resolutive del auto de **junio 28** pluricitado el despacho solamente nos dice:

*“TERCERO. IMPONER como sanción al abogado José Luis Barrios Arrieta C.C. No. 9.309.306 y a la demandada Raquel Triana Silva C.C. 24.227.192 en forma solidaria, por la suma diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, que ascienden a la suma de \$10.000.000.00, por su actuar temerario y de mala fe, bajo los postulados del artículo 147 del CGP, la cual deberán cancelar dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta decisión, suma que se debe consignar en la cuenta de multas y cauciones del banco agrario de Colombia; de no ser consignadas dentro del término concedido con la constancia del caso, por secretaria se ordena dirigir el oficio respectivo al Consejo Seccional de Judicatura, a efectos de surtir el cobro coactivo.*

*CUARTO. COMPULSAR copias ante la Comisión Seccional De Disciplina Judicial De Boyacá, con el fin de que adelante la investigación disciplinaria al abogado José Luis Barrios Arrieta por faltas a la ética profesional.*

*QUINTO. TENER por suspendido el proceso desde el 21 de abril de 2022 hasta que se resuelva la recusación, conforme el artículo 145 del CGP.”*

El señor juez, fiel a su palabra, efectivamente, y sin esperar que el Tribunal resolviera sobre si tenía razón jurídica o no, en su actuación, mediante oficio 00621 de julio 14 de 2022, se dirigió a la Oficina de Apoyo Judicial, informando que: “... esta agencia judicial dispuso *COMPULSAR copias de la actuación de la referencia, con el fin de que adelante la investigación disciplinaria al abogado José Luis Barrios Arrieta por faltas a la ética profesional.*”

Se desconoce cómo en **julio 14 de 2022** ya sabía de antemano el despacho, que su decisión de **junio 28** sería confirmada en septiembre **1º de 2022**.

En el **auto 519 de 2021** (entre muchos otros) la Corte Constitucional explicita y claramente dijo: “El legislador no previó un procedimiento particular destinado a la aplicación del poder correccional previsto por el artículo 147 del CGP. Lo anterior no supone, sin embargo, que esta facultad no se encuentre sujeta al debido proceso. Al respecto, la Corte ha señalado que “la imposición de la multa debe en todo caso estar antecedida de una actuación que cumpla con los ingredientes mínimos del debido proceso (publicidad, contradicción y defensa)”. Estas garantías permiten, como se manifestó, que la potestad sancionatoria de la cual emanan se ejerza como una herramienta tendiente a asegurar la vigencia de los derechos y deberes de los ciudadanos, y de un orden justo, en tanto fines esenciales del Estado.”.

Compárese, por favor, lo dicho y citado de la Corte Constitucional con la actuación del despacho en los autos citados y hasta un lego en la materia, toma las decisiones que en derecho corresponde.

No dudo que el señor juez conoce cuáles son los principios que regulan la función sancionatoria que utiliza en mi contra. Sin embargo, recordamos respetuosamente, que el actuar de las autoridades siempre debe fundamentarse en los principios procesales de publicidad, inmediatez, presunción de inocencia, derecho de defensa y contradicción, favorabilidad, juez natural o legal, proporcionalidad, no *reformatio in pejus* y *non bis in idem*; y también, no menos importante, en el principio de legalidad para que las acciones sean válidas ante el ordenamiento jurídico y posteriormente, no sea quebrantada su presunción de legalidad.

Dado que esta solicitud de nulidad se sustenta en la causal 2º del Artículo 133 del CGP, es decir, en todos los procedimientos; decidir en una providencia **pretermitiendo una etapa procesal**, mínimo es entonces señalar, respetuosamente y para efectos meramente didácticos, - porque sin duda el señor juez las conoce -, cuáles son las etapas del proceso administrativo sancionatorio.

Lo primero que nos enseñan en las facultades de derecho al respecto, es que la función sancionatoria **debe regirse por las normas**

existentes que para el caso apliquen, sin perjuicio de los procedimientos establecidos en leyes especiales ya que, en lo no previsto, se aplicarán las disposiciones contenidas en la Primera Parte de la Ley 1437 de 2011, norma que regula el procedimiento administrativo general.

Respetuosamente le pregunté antes al Superior y ahora lo hago al señor juez para cuando resuelva la presente: ¿Dígame, por favor, cuál fue el procedimiento legal utilizado por el despacho para determinar que la recusación era temeraria y que el suscrito y su poderdante debíamos ser sancionado por ello?

Una pregunta sencilla, con una respuesta de igual calibre. Si el señor juez, por favor, nos señala la norma utilizada dentro del auto de **junio 28** y confirmada en el de **octubre 19**, no solo nos garantiza el debido proceso, sino que además, podríamos verificarse entonces, si su proceder se ajusta a derecho y justicia. De ser así, le presento de antemano mis disculpas. retiro la presente solicitud y accedo al pago de la sanción.

Ahora bien, ese proceso disciplinario sancionatorio que se le autoriza por el CGP genéricamente a los jueces, no es, ni puede ser, una isla que desconozca el Artículo 29 constitucional, tal como se lo expresé respetuosamente al Tribunal en memorial que adjunto al presente y hago parte integrante del mismo.

Esa *primera etapa* de todo proceso, es la razón para indicar que si bien en nuestro caso, se pudo cumplir la etapa inicial - que puede ser de oficio o a petición de parte -, y para no dejarlo como una rueda suelta en la estructura del derecho, digamos que comienza de conformidad con la Ley 1952 de 2019, con la etapa de queja o denuncia. Esta etapa, incluso en materia disciplinaria general tiene la fase preliminar y después la que decide si hay mérito para la apertura de la investigación. Una *segunda etapa* y bien importante, es la formulación de cargo al investigado, en el que señalará con precisión y claridad, las disposiciones presuntamente infringidas y las sanciones procedentes, para que el investigado, en ejercicio de su derecho de defensa y contradicción, presente escrito de descargo y aporte las pruebas que pretenda hacer valer al interior de la investigación. Y *una tercera etapa*: la decisión de fondo.

Como el señor juez puede apreciar en nuestro caso, el despacho a su cargo, al parecer, ejecutó las etapas mínimas 1 y 3 de todo procedimiento sancionatorio, desconociendo u obviando, sin una explicación jurídica hasta ahora conocida, la etapa 2, es decir, la etapa de cargos y descargos, y probatoria de ser necesario.

El señor juez consideró en su entender jurídico que la solicitud de recusación no estaba probada. (primer elemento del Artículo 147 CGP). No compartimos lo anterior por las razones expuestas con anterioridad en memoriales precedentes, pero al menos, se explica jurídicamente porque lo considera así y eso es el derecho y la exigencia procesal. Sin embargo, ello no ocurre en el segundo elemento. Y ese, es precisamente el soporte de la sanción y la compulsa de copias. *¿Cómo probó el despacho que hubo temeridad y mala fe en la proposición de esa recusación?*

Subsecuentemente. *¿Cuál fue el parámetro objetivo que llevó al despacho a imponer la sanción económica más alta?*

A diferencia de su explicación sobre su no condición o estado de impedimento/recusación, se observa en las providencias acusadas de violar la Constitución y la Ley, que sobre esos aspectos tan cruciales, que resaltamos en los interrogantes anteriores, no existe el menor asomo de pronunciamiento en las providencias de junio 28 y octubre 19 de 2022 dentro del proceso referenciado. Ni siquiera sumariamente o por error. Esa omisión, no solo es una clara pretermisión o desconocimiento de una etapa del procedimiento sancionatorio, sino que además, elimina o convierte en letra muerta el Artículo 29 de la Constitución.

Y si bien es cierto, en esta materia disciplinaria no aplica el mismo grado de rigurosidad que se predica en materia penal, ello no quiere decir que se desconozca el Artículo 29 superior y se sancione sin ser oído escuchado y vencido en juicio, como le ha sucedido al suscrito y a mi mandante.

Sin embargo, decidió subjetivamente el respetado señor juez, - **junio 28** - imponer una sanción en mi contra y la de ella. En mi caso particular; una sanción de compulsas de copias disciplinaria - por vez primera en mis más de 40 años de ser profesional del derecho - y, adicionalmente o de colofón - como se dice en el auto -, *“sin señalar el más mínimo parámetro de un criterio de graduación,-* como es su obligación legal - y me impuso el pago de una multa en el máximo grado posible, produciendo una decisión abiertamente inconstitucional.

Lo inconstitucional e ilegal de ese proceder, - extraño en su señoría -, porque repito, no dudo que conozca las normas disciplinarias y los poderes del juez, es que pese a la Constitución y a la numerosa jurisprudencia al respecto (citada en el escrito al Tribunal que se adjunta e integra al presente), lo hizo con base en una presunta responsabilidad objetiva (prohibida hace mucho en nuestro derecho) y con base en su entender subjetivo.

Ya para finalizar, consideramos respetuosamente como importante señalar que, en septiembre 1º de 2022, el Tribunal se declaró sin competencia para resolver o pronunciarse sobre lo pertinente a mi sanción inconstitucional e ilegal y sobre el procedimiento utilizado por el *a-quo* para ello. Nadie responde a mis escritos, ni el señor juez que es el competente. Por ende, mi acceso a la justicia y el de mi mandante, es huérfano absoluto.

Ciertamente, en esas condiciones y visto el contenido de los autos de junio 28 y octubre 19, el suscrito y mi poderdante hemos quedado sin que ninguna autoridad competente se pronuncie sobre los hechos planteados sobre la inconstitucionalidad e ilegalidad del proceder sancionatorio en nuestra contra y por ende, **solicitamos respetuosamente al despacho, la nulidad de lo actuado por las razones jurídicas expuestas**, con la esperanza que la justicia deje la retórica y se haga realidad, y que el señor juez reconsidere su proceder, revoque todas las providencias citadas, se atenga al procedimiento, cumpla las etapas procesales y resuelva de fondo como debe ser y esperamos todos los ciudadanos de un dispensador de justicia.

Si el señor juez considera que no existe nulidad en su proceder, - y ello hace carrera - es decir, que en adelante un juez de la República, puede compulsar copias, sancionar y multar a una persona - del común o litigante - sin ser escuchado previamente en descargos y solo prevalido de su cargo o autoridad, como es nuestro caso, entonces. como decía el bardo antioqueño<sup>1</sup>: *¡siquiera se murieron los abuelos!*

**PETICION:**

**Declarar la nulidad** de las providencias de **junio 28** y octubre **29 de 2022** por las razones y en los puntos expuestos anteriormente.

**PRUEBAS.**

Solicito respetuosamente al señor juez, que en el trámite que ordena el Artículo 134 del CGP para resolver la presente petición y con destino probatorio, se anexe:

-Copia del auto por medio del cual se me notifica del inicio del procedimiento sancionatorio por presunta recusación temeraria y me

<sup>1</sup> Jorge Robledo Ortiz en el poema “*Siquiera se murieron los abuelos*”. Antología: Volumen “Barro de Arriería”

informan de mis derechos a descargos y pruebas para ratificar mi presunción de inocencia.

-Si dicha actuación no existe, solicito - con el fin de ser utilizada en otras instancias - que expresamente se me indiquen las razones jurídicas para esa inexistencia procesal.

-Se me señalen los parámetros por los cuales el despacho llegó a la conclusión de que el suscrito es acreedor al máximo de sanción pecuniaria posible.

Las demás que el despacho considere pertinente y procedente.

Con la seguridad en la justicia, de su señoría,



**JOSÉ LUIS BARRIOS ARRIETA**



Yopal, agosto 25 de 2022

Señores Magistrados

**TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE YOPAL**

E.

S.

D.

PROCESO REIVINDICATORIO  
RADICACIÓN: **2017- 00168 - 02**  
DEMANDANTES: GILBERTO GALINDO y otros.  
DEMANDADOS: CÉSAR WILLIAN NIÑO PIÑEROS y otra.

**JOSÉ LUIS BARRIOS ARRIETA**, identificado con cédula de ciudadanía 9.309.306, abogado en ejercicio portador de la tarjeta profesional 45.549 del C.S.J; en mi condición de apoderado de **RAQUEL TRIANA SILVA**, parte demandada en este proceso, me permito manifestar al honorable Tribunal, que **no comparto** la decisión del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Yopal contenida en el auto de junio 28 de 2022, mediante el cual resolvió en el punto Primero: *“NO ACEPTAR la recusación presentada por la demandada Raquel Triana Silva a través de su apoderado judicial por las razones expuestas en precedencia, declarando infundada la misma.”*(subrayo); así como en el Tercero: *“IMPONER como sanción al abogado José Luis Barrios Arrieta C.C. No. 9.309.306 y a la demandada Raquel Triana Silva C.C. 24.227.192 en forma solidaria, por la suma diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, que ascienden a la suma de \$10.000.000.00, por su actuar temerario y de mala fe, bajo los postulados del artículo 147 del CGP, la cual deberán cancelar dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta decisión, suma que se debe consignar en la cuenta de multas y cauciones del banco agrario de Colombia; de no ser consignadas dentro del término concedido con la constancia del caso, por secretaria se ordena dirigir el oficio respectivo al Consejo Seccional de Judicatura, a efectos de surtir el cobro coactivo.”*(subrayo); y en el Cuarto: *“COMPULSAR copias ante la Comisión Seccional De Disciplina Judicial De Boyacá, con el fin de que adelante la investigación disciplinaria al abogado José Luis Barrios Arrieta por faltas a la ética profesional.”*. (subrayo)

El sustento de lo anterior es : “(...), *diáfano resulta que la recusación propuesta contra el titular del Juzgado Segundo Civil del Circuito, no es procedente, **pues carece de cualquier asidero fáctico o jurídico**, además, que es una actuación que desconoce abierta y flagrantemente los presupuestos adjetivos y procesales consagrados tanto en la ley como en la jurisprudencia, **ya que se basó en situaciones que carecen de asidero fáctico y legal para su proposición**; en suma, **la ligereza con que se actuó coloca a los proponentes** de la figura en comento **en posición de temeridad**, en tanto, con la situación esbozada se dilata la diligencia de entrega ordenada en cumplimiento de la sentencia de fecha 18 de agosto de 2019.*

*En efecto, se procederá a dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 147 del CGP, **imponiendo como sanción la suma diez (10) salarios mínimos mensuales** la demandada y a su representante judicial en forma solidaria, por haber actuado con temeridad o mala fe, además de remitir copia de lo pertinente a la autoridad que corresponda con el fin de que adelante la investigación disciplinaria al abogado por faltas a la **ética profesional**”.* (resaltados y subrayas fuera de texto)

Respetuosamente manifiesto de antemano que tomaré en el presente dos aristas explicativas de las razones por las cuales no comparto la decisión sancionadora. El aspecto ontológico del Artículo 147 del CGP y la vulneración del debido proceso en su aplicación en este caso y el aspecto fáctico y probatorio.

Contrario al concepto **objetivo** que maneja el despacho en el auto donde impone la sanción, (28/06/2022) el Artículo 147 citado, prevé una potestad correccional específicamente aplicable con dos parámetros: i) cuando una recusación se declare no probada y ii) una vez la recusación es declarada improcedente y, con ello, el efecto equivalente a la inexistencia siquiera de prueba sumaria que la sustentara, procede la aplicación de la sanción prevista por el CGP, y esto depende esencialmente de que el juez considere acreditado el segundo elemento del supuesto de hecho previsto por el Artículo 147 del CGP, esto es, la mala fe o la temeridad en la presentación de la recusación respectiva.

Finalmente, la sanción se mueve - como toda sanción - entre un mínimo y un máximo cuya razón de ser o imposición del monto debe explicarse en la providencia.

El sentido teleológico de la norma es la de asegurar el respeto de los deberes atribuidos a las partes y a los apoderados, así como el de proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos y abstenerse de obstaculizar el desarrollo de las audiencias y diligencias.

Por manera que, - como parece creer el *a-quo* -, no basta con afirmar que no se admite la recusación para que ello de suyo produzca la sanción al recusante. De igual forma y en cumplimiento de los artículos 29 y 83 de la Constitución Política, **la temeridad y la mala fe no se presumen**, sino que deben estar probadas en el expediente.

El juez sancionador no explica en manera alguna ninguna de las dos acciones. (A este aspecto nos referiremos más adelante). De igual forma, la decisión “silenciosa” de su motivación (ni siquiera expone porque escoge el máximo monto de la sanción) es una actitud procesal que evidentemente restringe el derecho a la defensa al no conocerse, señalarse y/o probarse el motivo de la no aceptación de la recusación y su grado de sanción, mucho más allá *del criterio formalista* (desconocedor del Artículo 228 constitucional) que utiliza el despacho para negar la recusación y establecer la sanción.

Observen por favor, honorables magistrados, que el juez recusado hace mención someramente a que ciertamente se encontraba (y aún se encuentra) subjudice, en virtud de denuncias penales de mi poderdante y su esposo; denuncias que en su momento lo habían llevado procesalmente a una **imputación** que persistió justo a la fecha en que decide dictar el auto que al parecer motiva la recusación de mi mandante. Sin embargo, pretende el dispensador de justicia justificar su no aceptación de la recusación, amparado no solo con el aspecto formal de la causal 7° invocada por mi poderdante y desarrollado posteriormente por el suscrito, sino sugiriendo varias veces que: “el fiscal del caso solicitó la preclusión,”... **por encontrarse reunidos los presupuestos de la atipicidad del hecho investigado, dejando ausente la concurrencia de este requisito indispensable para que proceda la recusación.**” (resalto)

No menciona que esa misma fiscalía había encontrado inicialmente méritos para imputarlo y aún no se sabe que dirá la Corte Suprema de Justicia.

Con esta cita reiterada, el juez sancionador actúa como si desconociera que tal solicitud de la fiscalía no implica terminación del proceso en su contra o cambia su denominación de imputado penal o

es una patente para garantizar a la comunidad su imparcialidad (y al parecer, es el aspecto objetivo de la recusación).

Ahora bien, que se ajuste o no esa denuncia como un acto originado dentro o fuera del expediente y por ende aplicable o no de la causal invocada, es algo discutible en todo caso. Pero, afirmar el despacho como soporte de su decisión, que es por falta de condena al momento de la recusación “(...) *expuesta por la demandada por conducto de su representante judicial, por resultar abiertamente contraria a derecho, en tanto no cumple con ninguno de los requisitos previstos en la causal séptima del artículo 141 del Código General del Proceso para su prosperidad*”, y con base en esa situación fáctica y solo su criterio subjetivo ser suficiente para sancionarnos sin garantías mínimas de defensa, es francamente inaceptable en el ámbito del derecho.

Lo cierto es que, al referirse solo al criterio de la fiscalía, el silencio del juez para hablar sobre su llamamiento a juicio es inexplicable dentro de dicho auto. Se refugia en la formalidad para no dar explicación a su actitud - contra la ética al menos -, ya que por simple moralidad judicial y garantía del principio de imparcialidad – que es obligatorio de todo juez - la mínima sospecha en la comunidad o las partes sobre su probidad o imparcialidad - que la fiscalía ya había admitido - debió provocar en el juez mencionado la necesidad ética de alejarse de cualquier actividad procesal, mientras su situación estuviera en esa condición.

Esa fue tal vez - como lo amplifico más adelante - la consideración tomada por mi poderdante al presentar válidamente, en mi respetuoso entender, una recusación contra el señor juez y en virtud del contrato de mandato ordenar al suscrito prosiguiera con la defensa de sus derechos ante el juez denunciado e imputado por prevaricato por acción.

En mi respetuoso concepto, y de acuerdo con el contenido filosófico y conceptual de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en casos similares<sup>1</sup>, la actuación de mi poderdante y el desarrollo de ella por parte del suscrito, no carece de sustento jurídico o es “*abiertamente contraria a derecho*” como para tildarla de temeraria o mala fe y por ende susceptible de sanción en máximo grado, y como si fuere poco, de falta disciplinaria. Tampoco, - y como admite el propio

---

<sup>1</sup> Entre otros, auto A607 de 2021, auto 475 de 2019 y sentencia T-622/1999

juez tácitamente -, se trata de una recusación improcedente y manifiestamente impertinente, o de mala fe dentro del trámite mencionado, o presentada con pruebas o argumentos inexistentes que evidenciaran que nuestra actuación se encaminara a desnaturalizar los fines que persigue el sistema de justicia, es decir, la imparcialidad e independencia de los jueces, que como bien citaba Calamandrei, “es lo único que el ciudadano pide al juez: Imparcialidad e independencia”.

Adicional a lo anterior, en mi comedido entender del derecho, y ya desde el punto de vista procesal, la actuación sancionatoria del despacho desconoce no solo la presunción de buena fe e inocencia y confianza legítima, sino además el debido proceso, para llegar a establecer una sanción de multa como la que ahora nos convoca y por ende, el tratamiento igualitario ante la ley.

Ciertamente y como ya lo señaló la Corte Constitucional en su oportunidad y se corrobora en nuestro caso, no solo es inexistente en el auto del 28 de junio de 2022 proferido por el Juez Segundo Civil del Circuito de Yopal, el método o procedimiento utilizado para llegar a la conclusión sancionatoria, sino que tampoco aparece descrito en el CGP el procedimiento particular destinado a la aplicación del poder correccional previsto por su Artículo 147.

En este caso, de la lectura del auto citado parece intuirse que el juez sancionador hace uso es de la proscrita responsabilidad objetiva y por ende, considera erradamente el togado que solo basta con negar la recusación, por improcedente o cualquier razón (- jurídica o no -) para que ella, *ipso facto* sea factor de sanción.

En todo caso los abogados sabemos – y el juez con mayor razón - que cualquiera que sea el procedimiento que se adopte, ya fuese por analogía (como sería la aplicación del Artículo 59 de la Ley 270, al que el despacho sancionador no hace mención alguna siquiera sumariamente)<sup>2</sup> o que utilice un método de lógica zahorí, por ejemplo, este procedimiento **se encuentra necesariamente sujeto al debido proceso**, ya sea que se acoja al ordenamiento jurídico interno (Artículo

---

<sup>2</sup> ARTÍCULO 59. PROCEDIMIENTO. El magistrado o juez hará saber al infractor que su conducta acarrea la correspondiente sanción y de inmediato oír las explicaciones que éste quiera suministrar en su defensa. Si éstas no fueren satisfactorias, procederá a señalar la sanción en resolución motivada contra la cual solamente procede el recurso de reposición interpuesto en el momento de la notificación. El sancionado dispone de veinticuatro horas para sustentar y el funcionario de un tiempo igual para resolverlo.  
(Negrillas fuera de texto)

29 de la Constitución o el Artículo 2° del CGP<sup>3</sup>) o al ámbito internacional - al que está obligado nuestro sistema por el bloque de constitucionalidad -, como son verbigracias, lo señalado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Artículo 14.1) y por el Pacto de San José (Artículo 8).

Al respecto y como puede demostrarse de la lectura del expediente y del auto citado, de manera respetuosa señalamos que, el señor juez sancionador, en el plurimencionado auto de junio 28, parece desdeñar la jurisprudencia de la Corte Constitucional<sup>4</sup> en esta clase de asuntos por cuanto la Corte, perentoriamente, ha señalado que: *“La imposición de la multa debe en todo caso estar antecedida de una actuación que cumpla con los ingredientes mínimos del debido proceso (publicidad, contradicción y defensa)”*. Para la Corte, estas garantías permiten, que la potestad sancionatoria de la cual emanan se ejerza como una herramienta tendiente a asegurar la vigencia de los derechos y deberes de los ciudadanos, y de un orden justo, en tanto fines esenciales del Estado.

Un segundo aspecto de nuestras razones tiene que ver con lo fáctico procesal.

En primer lugar, debo precisar al Tribunal que quien recusa al señor juez no es el suscrito, sino la demandada RAQUEL TRIANA SILVA. Lo anterior se prueba con la lectura del contenido del poder que me fue conferido. En efecto, baste leer cuidadosamente el texto y encontramos que afirma categóricamente: *“... respetuosamente concurre ante su despacho a manifestarle que, he sido notificada del auto de Marzo 11/2022 proferido por usted, actuación realizada pese a las evidentes y notorias causales de recusación que existen entre las partes y su señoría (art. 141-7 del CGP).”* (sic)(subrayo), con lo cual puede evidenciarse que ciertamente es la poderdante quien lo recusa, citando incluso la causal que estima se ha configurado:

*7. Haber formulado alguna de las partes, su representante o apoderado, denuncia penal o disciplinaria contra el juez, su cónyuge o compañero permanente, o pariente en primer grado de consanguinidad o civil, antes de iniciarse el proceso o después,*

---

<sup>3</sup>, el artículo 2º del CGP señala que “Toda persona o grupo de personas tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio de sus derechos y la defensa de sus intereses, con sujeción a un debido proceso de duración razonable. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento injustificado será sancionado”

<sup>4</sup> Sentencia C- 203 de 2011

*siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la sentencia, y que el denunciado se halle vinculado a la investigación.*

Insiste la poderdante en mencionar que: “Ante esa burda violación del CGP, manifiesto que otorgo poder especial al DR: JOSÉ LUIS BARRIOS ARRIETA, ..., para que en lo sucesivo, represente mis derechos como parte demandada dentro del mencionado proceso.” (subrayo). Adicionalmente, en el poder conferido expresamente se dice que además de las potestades entregadas e insiste en “... amén de relevado de costas y gastos procesales, mi apoderado queda con todas las facultades contenidas en los artículos 74 y ss del CGP, en especial, ...**recusar**, ...” (sic)(subrayo y resalto).

Como quiera que la recusación que formula directamente la demandada no puede hacerla o surtirse en un proceso sino a través de apoderado judicial, el suscrito, en ejercicio del mandato, así lo hace. Lo anterior se confirma en el auto en cuestión cuando menciona: “**NO ACEPTAR la recusación presentada por la demandada Raquel Triana Silva a través de su apoderado judicial ...**”. (subrayo).

Hay entonces la necesidad de contar con un apoderado para que, pueda darse un trámite de recusación dentro de un proceso, es la razón para conferirme poder expreso en dicho efecto, tal como lo hice en cumplimiento del mandato que me impuso, relevándome de costas y gastos procesales.

Otra cosa pudiere ser si el suscrito hubiere presentado la recusación *motu proprio*, lo que supondría una decisión ajena a los intereses del poderdante, quien por el contrario manifiesta estar convencida de que por el hecho evidente de estar vigente una imputación por el delito de prevaricato contra el señor juez se configura un elemento fáctico de que trata la causal del Artículo 141 -7, al tenor de la jurisprudencia que impone la existencia de una imputación, tal como lo llevó a cabo en su momento la Fiscalía General de la Nación.

Se ha indicado que el auto acepta al momento de “... *realizar la adecuación fáctica al presupuesto normativo para la aceptación de los hechos de la recusación, ...*” que el señor juez estuvo en situación de **imputado** al aseverar que “1. Frente al hecho de existir denuncia contra el Juez: efectivamente los demandados **formularon denuncia** contra el

*togado que conoce el presente proceso reivindicatorio, en razón a la sentencia de primera instancia proferida el 18 de agosto de 2019, que en su oportunidad fue recurrida en apelación ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal y previo a la resolución de instancia, por considerar que el Juez había incurrido en prevaricato por acción.”(resalto); **imputación** que lo cobijaba al momento de ordenar la entrega del inmueble y de realizar la diligencia de entrega, ya que la audiencia de solicitud de preclusión se llevó a cabo un día después de la anterior fecha, en la cual la Fiscalía Segunda ante el Tribunal Superior solicitó la preclusión de la investigación, lo que fue aceptado por el Tribunal, decisión que, como el señor juez sancionador bien sabe, fue recurrida por el denunciante y se encuentra en trámite de segunda instancia ante la Corte Suprema de Justicia, lo que permitiría afirmar sin hesitación alguna que a la presente fecha, el señor juez se halla aun en situación fáctica de **imputado**.*

El argumento de la poderdante se basó en una suposición lógica, cual era que, si estar imputado por hechos ajenos al proceso era causal de recusación, debería serlo aún más el estar imputado por hechos originados en el proceso, como fue la sentencia a la que calificó de prevaricadora y que la Fiscalía inicialmente en su momento aceptó como tal formulando por ello la correspondiente imputación. Se desconocen las razones jurídicas por las cuales el fiscal correspondiente parece haber cambiado de opinión, pero, en todo caso lo cierto es que por vía jurisprudencial se acepta como situación de denunciado penalmente.

Como ya esbozamos, no deja entonces de ser objeto de discusión el establecer como una eventual causal de recusación que se le formule denuncia al juez por hechos relacionados con el proceso en cuestión y que la Fiscalía acepte imputarlo por un delito con base en los hechos denunciados; recusación que procura, tal como lo acota el auto que “*Las casuales de impedimento y recusación están instituidas dentro del ordenamiento con el fin de asegurar la imparcialidad de los jueces en el cumplimiento de sus funciones respecto de los asuntos que se someten a su conocimiento y, por tanto, evitar toda suspicacia en torno al trámite y decisión de los procesos judiciales. En este sentido, la ley establece la posibilidad de sustraer del conocimiento de determinado proceso al juez que lo venía adelantando, cuando se presenten los eventos que taxativamente ha consagrado el legislador.*”.



No se comparte entonces la aseveración del auto respecto a que el señor juez no tendría la condición de **imputado** cuando afirma: *“Situación jurídica que no ha ocurrido, tan es así que antes de que a ello se procediera, el fiscal del caso solicito la preclusión, por encontrarse reunidos los presupuestos de la atipicidad del hecho investigado, dejando ausente la concurrencia de este requisito indispensable para que proceda la recusación.”*; ya que, una cosa es la primera decisión de imputarle un delito de prevaricato y otra cosa es que después se solicite la preclusión de la investigación, asunto que no cobra vigencia sino en la medida en que el juez acepte tal solicitud y su decisión quede ejecutoriada; lo que no ocurre en este caso, y se repite, hasta la fecha el señor juez se encuentra en situación de imputado, con lo cual se contradice su conclusión respecto a que *“...no podría aceptar el titular de este despacho la recusación expuesta por la demandada por conducto de su representante judicial, por resultar abiertamente contaría a derecho, en tanto no cumple con ninguno de los requisitos previstos en la causal séptima del artículo 141 del Código General del Proceso para su prosperidad.”*, ya que sigue cumpliéndose el requisito de estar **imputado** de que trata la norma citada.

En lo que se refiere a la sanción impuesta a la poderdante y apoderado, la máxima de que trata el Artículo 147 del CGP, 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, tampoco podría compartirse pues no se entiende como totalmente cierta la afirmación de *“...pues carece de cualquier asidero factico o jurídico, además, que es una actuación que desconoce abierta y flagrantemente los presupuestos adjetivos y procesales consagrados tanto en la ley como en la jurisprudencia,....”*; ya que está probado en el expediente que si existe a la fecha un asidero fáctico: la **imputación penal**; y por tanto, el presunto desconocimiento de los presupuestos adjetivos y procesales, no resulta ser abierto y flagrante conforme a la explicación que tuvo la poderdante para formular la recusación. Tan *sui generis* es la situación que al tenor de lo antes visto, bien podría dar lugar a cambiar la jurisprudencia y la norma, pues no bastaría elevar la denuncia penal sino que exige un primer paso de la fiscalía y es formular la **imputación** por creer a ese momento que existe mérito para vincular la responsabilidad penal del juez por el reato denunciado; de donde desaparecería la situación que acota la jurisprudencia de la Corte Constitucional citada (Sentencia C - 365 de 2000) ya que esas presuntas maniobras dilatorias no tendría oportunidad alguna con la sola denuncia sino que se enraizarían con

base en la apreciación de la Fiscalía al momento de imputar el delito denunciado.

No se compadece con la verdad entonces sostener que hay lugar a la sanción “...por su actuar temerario y de mala fe, bajo los postulados del artículo 147 del CGP”; ya que no existe temeridad de parte de la denunciante y demandada, como tampoco del apoderado, y mucho menos cobijarlo bajo el manto de la mala fe, pues siendo la buena fe una situación protegida constitucionalmente, ella debe ser probada y no se vislumbra asomo de la misma, lo que impone que si bien no se acepte la recusación una vez discutidos los planteamientos esbozados, no cabe imponer sanción por ello a la poderdante y su apoderado.

Por último, no hay el menor atisbo en el auto sancionador, de un proceso con garantías mínimas para ejercer nuestra defensa. Es decir, como el juez no puede ignorar la ley, se presume que actuó a sabiendas al dictar una providencia abiertamente violadora de la Constitución y de la ley, lo que de si podría ser considerada como una conducta tipificada en el Código Penal como prevaricato por acción y que amerita la compulsión de copias para que se investigue su actuación, no solo en el ámbito penal, sino en el disciplinario.

De sus señorías,



**JOSÉ LUIS BARRIOS ARRIETA**